

Continuación de la 21ª sesión de prórroga: 7 de Febrero de 1912

PRESIDENCIA DEL DR. VICTORINO DE LA PLAZA

SUMARIO: I.—Asuntos entrados.

II.—Continúa la consideración del despacho de la Comisión de Negocios Constitucionales en el proyecto de reforma de la **Ley Electoral**. Se aprueba modificado.

Señores Senadores

Carbó
Civit
Echagüe
González
Güemes
Guñazú
Láinez
Maciá
Mendoza
Olaechea y Alcorta
Padilla
Pinto
Posse
Resoagli
Terán
Villanueva (E.)
Virasoro

En Buenos Aires, á los siete días del mes de Febrero de mil novecientos doce, reunidos en su sala de sesiones el señor Presidente, presente el señor Ministro del Interior, doctor don Indalecio Gómez, y los señores senadores al margen consignados, con inasistencia de los señores senadores Del Pino, Peña y Soldati, (con licencia); Carri-

rrillo, Funes, Garramuño, Godoy, Irigoyen, Malbrán, Ovejero, Villanueva (E.) (con aviso), dice el

Sr. Presidente—Está abierta la sesión con diecisiete señores senadores presentes.

Se va á dar cuenta de los asuntos entrados.

I

—Se lee:

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1.º Los subsidios acordados por el Congreso ó que acordare en lo sucesivo para

contribuir á la construcción ó mantenimiento de los hospitales y asilos de la República, asociaciones de beneficencia, bibliotecas, instituciones de enseñanza y de fines educativos que no sean oficiales, y las de cultura, fomento é interés general, monumentos conmemorativos y publicaciones, se pagarán exclusivamente con los recursos creados por esta ley, se regirán por la misma y figurarán en un capítulo especial del presupuesto.

Art. 2.º Créase un fondo especial de subsidios, que no podrá ser empleado en otros objetos que los determinados en el artículo anterior, ingresará á Tesorería General y será compuesto de los siguientes recursos:

- 1.º La administración de la Lotería nacional entregará al fondo especial el producido líquido que resultare de las extracciones con más el producto del impuesto establecido por la ley 6026, y la suma proveniente de la prescripción de premios, deducido su presupuesto de sueldos y gastos y las sumas destinadas, por las leyes número 3967 y complementaria del presupuesto, para obras de salubridad y subvenciones á templos de las provincias.
- 2.º Las autorizaciones que el Poder Ejecutivo acordare para el funcionamiento de nuevos hipódromos de carreras y agencias de apuestas mutuas, en la Capital y territorios nacionales, además de las prescripciones de la ley 7101, se harán á condición de destinar un 5 por ciento del producido total de la apuesta mutua, para el fondo especial de subsidios.
- 3.º La administración de impuestos internos entregará también al fondo especial el producto del impuesto á los perfumes y específicos creado por las leyes números 4639 y 6789.
- 4.º Desde la promulgación de esta ley los pasajes internos de primera clase, terrestres y fluviales, sean ordinarios, de

Febrero 7 de 1912

CAMARA DE SENADORES

Cont. sesión 21.ª de prórroga

Art. 12. El directorio continuará la construcción y administración de las obras sanitarias de las provincias, mientras la ley no resuelva lo contrario, empleando para ese fin los recursos que le asigne el presupuesto general ó leyes especiales, y debiendo llevar una contabilidad completamente separada de lo que corresponda á cada ciudad.

Art. 13. Hasta tanto el directorio de las obras sanitarias de Buenos Aires no haya realizado recursos suficientes para la ejecución de sus obras y el cumplimiento de lo establecido por el artículo 5.º de la presente ley, el servicio de los títulos autorizados por las leyes números 4158, 4973 y 2796, se hará de rentas generales con el producido líquido de las obras de salubridad, quedando el Poder Ejecutivo autorizado á usar del crédito para la continuación de dichas obras durante el año de 1912.

El directorio de las obras sanitarias reembolsará al tesoro las sumas anticipadas con ese objeto y cargará con el servicio de los títulos enunciadados cuando haya realizado las operaciones de crédito autorizadas por esta ley.

Art. 14. Comuníquese, etc.

Dada en la Cámara de Diputados, en Buenos Aires, á 2 de Febrero de 1912.

E. CANTÓN.

A. Suñeza.

Secretario.

—A la Comisión de Legislación.

El pueblo y comercio de Humahuaca (Jujuy), solicita se incluya una partida en el presupuesto de 1912 para la creación y sostenimiento de una escuela normal rural.

—A la de Presupuesto.

Sr. Presidente—Se va á continuar con la orden del día.

—Se lee:

Título 2.º Capítulo único. De la proclamación de los candidatos.

Artículo 9.º

Sr. Presidente—Si no se hace observación se dará por aprobado.

—Aprobado.

—Se lee el 10.

Sr. Presidente—Aprobado.

—Se lee el 11 y se aprueba.

—Se lee:

Título 3.º De las elecciones parlamentarias y presidenciales.

Sr. González—Pido la palabra.

En este título 3.º no hay divergencia en ninguno de los despachos; haría indicación para que se diera por aprobado.

Sr. Villanueva (B.)—Pido la palabra.

No tengo inconveniente en que se vote en la forma que indica el señor Senador, pero antes quiero hacer una pequeña observación. En este título III, en sus diversos capítulos, se legisla respectivamente sobre las elecciones de diputados, senadores, Presidente y Vicepresidente de la República. Muchas veces en un mismo año hay dos y á veces tres elecciones, como sucedió en 1904 y en 1910, para estos casos, creo que lo que conviene es establecer por una disposición especial, que se puede intercalar en uno de estos capítulos, para que, las elecciones que corresponda hacerse en un mismo año, se hagan conjuntamente en un mismo día, para no molestar inútilmente á los ciudadanos, con mucha más razón ahora que el señor Ministro ha triunfado respecto al voto obligatorio.

Sr. Ministro del Interior—Eso podría consignarse en el título IV, en el que se habla de la convocatoria.

Sr. Villanueva (B.)—¿De la convocatoria en general?

Sr. Ministro del Interior—Sí, señor Senador.

Sr. Villanueva (B.)—Entonces lo propondré cuando llegue la oportunidad.

Sr. Presidente—No haciéndose observación y de acuerdo con la moción formulada por el señor Senador, se dará por aprobado el título III.

—Se lee:

Título IV. Capítulo I. De las convocatorias. Artículo 24.

Sr. Villanueva (B.)—Pido que se lean dos dos artículos que he entregado á la Secretaría, los que pueden figurar como incisos del artículo que acaba de leerse.

Sr. Secretario Ocampo—(Leyendo): «Cuando coincidan en un mismo año una elección ordinaria ó extraordinaria de electores de senadores por la Capital y una elección de diputados nacionales por la Capital, ellas tendrán lugar conjuntamente el último domingo de Marzo.»

«Cuando coincidan en un mismo año las elecciones de Presidente y Vicepresidente de la Nación con la elección ordinaria ó extraordinaria de electores de

Senador y la de diputados tendrán lugar todas conjuntamente en el primer domingo de Abril.

Sr. Villanueva (B.)—Se ha elegido en el primer caso el día que tenga lugar la elección de diputados y en el segundo el día que tenga lugar la elección de electores de Presidente y Vicepresidente. En la mayor parte de los Estados americanos se ha hecho esta innovación en las leyes electorales provinciales, conformándolas con los plazos de las leyes nacionales.

No sé si los señores senadores recuerdan una correspondencia del doctor Pellegrini, que se publicó en el diario «La Nación», a propósito de una elección que presenció en Nueva York en el año 1905 ó 1906, en la cual explicaba cómo había podido verificarse, en un mismo día y en un mismo acto y comicio, las elecciones de Presidente y Vice de la República, de Gobernador y Vice del Estado, de senadores y diputados provinciales, de jueces y de municipales.

Sr. Olaechea y Alcorta—La Comisión acepta.

Sr. Maciá—Podrían ir como incisos del artículo en discusión.

Sr. Ministro del Interior—Pueden ponerse como incisos 4.º y 5.º del artículo.

Sr. Láinez—El inciso 2.º dice que, «cuando no hubiese podido realizarse la elección en el día señalado, ó hubiese sido anulada, sólo podrá tener lugar nueva elección previa nueva convocatoria», y yo desearía saber si la Comisión entiende que deben pasar dos meses para hacerse esta nueva convocatoria.

Sr. Olaechea y Alcorta—La Comisión aconseja un mes y por error no se ha consignado en el despacho.

Sr. Láinez—Si es así, no tengo nada que decir.

Sr. Presidente—Se va á votar, entonces, el artículo con la aclaración hecha por el señor miembro informante.

—Se vota en esta forma y se aprueba.

Sr. González—Yo propondría que se votase simplemente los artículos en que hay modificaciones de la Comisión del Senado, porque no hay objeto en leer todo el despacho, que conocen perfectamente los señores senadores.

Sr. Maciá—Pero pueden enunciarse los artículos y votar sólo los que hayan sido objeto de modificación.

Sr. González—Supongo que se lee por el señor Secretario el despacho de la Comisión del Senado.

Sr. Presidente—Sí, señor Senador.

Sr. González—Entonces lo mejor sería votar por capítulos.

—Apoyado.

Sr. Presidente—Si el Senado lo resuelve como el señor Senador lo indica, así se hará.

Sr. González—Leer simplemente el número del capítulo.

Sr. Presidente—Habiendo asentimiento, así se hará.

Sr. Olaechea y Alcorta—Hay asentimiento tácito.

—Se aprueban los capítulos II. De la formación de colegios electorales y III. De las mesas receptoras de votos.

—Se lee: Capítulo IV. Del sufragio.

Sr. Láinez—Pido la palabra.

El capítulo IV—«Del sufragio»—comprende una cantidad muy grande de artículos y voy á proponer agregar uno al final de este capítulo, que diga: «Durante las horas de comicio quedan prohibidos los espectáculos populares al aire libre ó en recinto cerrado y toda otra clase de reuniones públicas».

Voy á dar la razón de este artículo. Aun cuando ya se ha adelantado en la ley de concesión de los hipódromos que no funcionarán en los días de elecciones, falta también consignar una prohibición igual para las reuniones deportivas que atraen un número muy grande de actores y espectadores. Lo mismo sucede con los teatros y todo ese género de espectáculos que llevan gran concurrencia.

Nuestro elector, además de ser compelido ahora por la ley, necesita también que se le quite hasta los motivos de distracción y que haya, por lo menos, cada dos años un día completamente cívico, en el que las gentes no tengan más preocupación que cumplir con ese deber, el más sagrado de todos.

Hago indicación para que la Comisión acepte el artículo en la forma que he indicado.

Sr. Olaechea y Alcorta—Estoy completamente de acuerdo en aceptar la indicación del señor Senador por Buenos Aires y encuentro perfectamente razo-

nable que se quite al elector todo pretexto que le aleje del comicio. Acepto, pues, la indicación á nombre de la Comisión.

Sr. Ministro del Interior—Pido la palabra.

Me cabe dudar de si no convendría poner esa disposición en el título IX «Prohibiciones y Penas.»

Sr. Láinez—Me parecía que correspondía colocarlo en el mismo capítulo en que se determina la función del público con relación al sufragio. El artículo 50, por ejemplo dice: «Ni en un radio de cincuenta metros del local donde funciona la mesa receptora, etc.» Ningún elector puede presentarse en el local donde funciona la mesa, etc. Y el artículo 51: «El Presidente del comicio hará retirar á los que no guarden en el acto electoral el comportamiento y moderación debidos».

Sr. Ministro del Interior—Pero en la economía general de la ley, me parece que el título IX, que contiene toda clase de prohibiciones, sería más adecuado.

Sr. Láinez—No tengo inconveniente que se coloque donde el autor de la ley lo considere más oportuno.

Sr. Ministro del Interior—Debería ponerse, entonces, como artículo 69, como el primero de las disposiciones prohibitivas.

Sr. Maciá—Me parece que quedaría mejor como artículo 74.

Sr. Virasoro—Que es correlativo del 73.

Sr. Maciá—Efectivamente.

Sr. Ministro del Interior—Tiene razón el señor Senador.

Sr. Olaechea y Alcorta—Aceptada la indicación del señor Senador por Buenos Aires, su ubicación no tiene importancia, pero creo que correspondería al título IX, donde se trata de las prohibiciones y penas.

Sr. Maciá—Podría ser la primera parte de ese artículo.

Sr. Láinez—Muy bien.

Sr. Secretario Ocampo (Leyendo)—«Durante las horas de comicio quedan prohibidos los espectáculos populares al aire libre ó en recinto cerrado, fiestas teatrales, deportivas y toda otra clase de reuniones públicas».

Sr. Láinez—Se puede agregar: «que no se refieran al acto electoral».

Sr. Secretario Ocampo (Leyendo)—«que no se refieran al acto electoral».

Sr. Villanueva (B.)—Sería necesario establecer la penalidad.

Sr. Láinez—La de hacerlas cesar por la policía.

Sr. Villanueva (B.)—Es una declaración lírica.

—Se lee: Título V. De las juntas escrutadoras.

Sr. Villanueva (B.)—Yo he insistido mucho sobre la necesidad del retrato como la mejor prueba de la identidad del votante. En la forma que está indicado en la ley en estos artículos para comprobar la identidad, hay que tener siempre peritos que estudien la impresión digital, lo cual motiva pérdida de tiempo y complicaciones, porque hay que enviar las impresiones digitales de los votantes discutidos junto con los sobres á la comisión central de escrutinio.

Sostengo que el retrato es la más fácil y la mejor comprobación de la identidad del votante, como lo he dicho, siempre, y con eso desaparecen todos los inconvenientes que he mencionado. Quisiera, señor Presidente, que el señor Ministro del Interior nos dijera si se va á cumplir la disposición de la ley de enrolamiento en el futuro, exigiendo el retrato en todas las libretas hasta que no haya una sola que no lo tenga.

Sr. Ministro del Interior—Sí, señor Senador. Ese es el propósito del señor Ministro de Guerra.

Sr. Villanueva (B.)—Yo le anoto un peligro. Se tiene, por lo general, más temor á la comprobación hecha por el retrato que á las impresiones digitales. Tengo denuncias de que actualmente muchos de los que especulan con la venta de libretas se han inscripto varias veces en distintas oficinas.

Sr. Ministro del Interior—Han habido varias denuncias al respecto...

Sr. Villanueva (B.)—Con la exigencia del retrato no hubiera resultado eso.

Me satisfacen las declaraciones del señor Ministro; pero son las mismas que hizo cuando se sancionó la ley de enrolamiento y, á pesar de los términos expresos de esa ley, se suprimió más tarde por un simple decreto la disposición ordenando el retrato hasta en la capital de la República.

Sr. Ministro del Interior—En una sesión anterior expliqué las razones por

qué se había suprimido la fotografía, pues era imposible hacer la operación del enrolamiento dentro del término que fijaba la ley.

Sr. Maciá—Pido la palabra.

Antes de pasar adelante, ¿no se podría salvar esa deficiencia poniendo en alguna parte de la ley un artículo transitorio que obligue a que, en un plazo prudencial, se pueda llenar el requisito de la fotografía?

Sr. Ministro del Interior—Perfectamente. Eso podría hacerse por decreto. Lo haré llegar á conocimiento del Ministro de Guerra...

Sr. Maciá—Si este año no se ha podido cumplir con este requisito, no hay por qué no se procure salvar la dificultad para las elecciones próximas en 1914.

Sr. Ministro del Interior—Perfectamente.

—Queda aprobado.

Sr. Presidente—El título VI ha sido aprobado en la sesión anterior.

—Se lee: Título VII. Capítulo único. Del escrutinio.

—Se lee el artículo 60.

Sr. Secretario Ocampo—Este artículo ha sido modificado en esta forma:

TITULO SEPTIMO

CAPITULO UNICO

DEL ESCRUTINIO

Art. 60. En sesión pública, la junta escrutadora, reunida en el recinto de la Cámara de Diputados, en la Capital de la Nación, y en el de las legislaturas, en las capitales de las provincias, desde el día siguiente al del acto electoral y continuando sus trabajos en tantos otros días cuantos sean necesarios á la rápida ejecución de las operaciones de este capítulo, procederá:

- 1.º A verificar si hay indicios de haber sido violentadas las urnas que se hayan recibido.
- 2.º Si cada urna viene debidamente acompañada por los documentos á que se refiere el artículo 48 de esta ley.
- 3.º A abrir las urnas recibidas y á confrontar el número de los sobres contenidos en ellas con la declaración del número de sufragantes, hecha por el presidente del

comicio respectivo al pie de la lista electoral de su mesa, según lo dispuesto por el artículo 47 de esta misma ley.

4.º A confrontar la hora en que, según el acta, se terminó el acto electoral, con la de la entrega de la urna á la oficina de correos.

5.º A verificar, al final de sus trabajos, si se recibieron tantas urnas cuantas eran las mesas del distrito.

A todas estas operaciones, tienen derecho de asistir los candidatos, ó uno de sus apoderados, al sólo objeto de fiscalizarlas en conformidad con esta ley. Siempre que varios candidatos hayan sido proclamados en una sola lista, deberán por mayoría nombrar un solo apoderado cerca de la junta.

Estas procuraciones serán hechas en la forma indicada y en el tiempo prescrito en el artículo 10 de esta ley.

—Queda aprobado, así como los artículos 61 y 62.

—Se lee:

Art. 63. Pasará después la junta al escrutinio de las boletas contenidas en cada urna, siguiendo en él lo dispuesto en el artículo 43, inciso 3, de esta ley. El presidente leerá ó hará leer en alta voz las boletas, que se extraerán una á una de la urna, y se pondrá de manifiesto á los otros miembros de la junta, candidatos ó sus apoderados, para que confronten el número de ellas con el de votantes anotados en las listas. Las boletas no inteligibles, las que no contengan nombres propios de personas ó contuviesen escritos varios, cuyo orden no puede determinarse, se considerarán en blanco. Si algún miembro de la junta, candidato proclamado ó apoderado tuviese duda sobre el contenido de una boleta leída, podrá pedir en el acto y deberá concedérsele, que la examine. En los casos de faltas de ortografía, leves diferencias de nombres y apellidos, inversión ó supresión de algunos de éstos, se decidirá en sentido favorable á la validez del voto y á su aplicación en favor de candidato conocido, cuando no figure en la elección otro con quien pueda confundirse. Si sobre esto ó sobre la inteligencia de la boleta no hubiere desde luego unanimidad en la junta, se reservará para la terminación del escrutinio la decisión de la duda, y entonces se hará por mayoría.

La operación empezará siempre por el examen de los sobres que tengan la nota de «impugnados». De ellos se retirará la impresión digital del elector y será entregada á los peritos identificadores para que, después de compararla con la existente en la foja personal del elector impugnado, declaren sobre la identidad. Si ésta no resultare probada, el voto no será tomado en cuenta en el cómputo; si resultare probada, el voto será tenido en cuenta y la junta ordenará la inmediata cancelación de la fianza del elector impugnado, ó su libertad en caso de arresto. Tanto en un caso como en el otro, los antecedentes se pasarán al fiscal federal para que sea exigida la responsabilidad al elector fraudulento ó al falso impugnador.

Sr. Maciá—Este artículo ha sido modificado.

Sr. Virasoro—Se está tratando el despacho de la Comisión.

Sr. Maciá—Como se dijo que se iban á tomar en cuenta las modificaciones...

Sr. Ministro del Interior—No sería malo explicar el sentido de la modificación del artículo 63. Decía allí: «El Presidente leerá en alta voz las boletas, que extraerá una á una de la urna ó balija, y pondrá de manifiesto, etc.» Esta operación designada al señor Presidente de la junta escrutadora haría imposible el escrutinio dentro de los términos de la ley, en los distritos electorales donde hay muchos electores, por ejemplo, en la Provincia de Buenos Aires. Con este objeto se autoriza á hacer que el presidente lea ó se nombre por los empleados necesarios para hacer la operación con la rapidez conveniente. Este es el sentido de la modificación.

Sr. Villanueva (B.)—No me había fijado en esta modificación. Yo prefiero la redacción de la Cámara de Diputados: que se tome un poco de trabajo el presidente de la junta y que lea él mismo todas las boletas. Es peligroso que ponga un *hábil*, como se llama en el lenguaje electoral para leer, porque puede leer otra cosa distinta de lo que está escrito. Ha pasado muchas veces esto en la Legislatura de Buenos Aires.

Sr. Maciá—Pero es sabido que cada boleta se debe poner de manifiesto á los demás miembros de la junta; de manera, que todos pueden comprobar si se ha leído otro nombre del que estaba en la boleta.

Sr. Villanueva (B.)—Yo insisto, señor Presidente, y citaré un caso típico, muy conocido en la historia de las elecciones por cuociente á que hizo referencia el señor Senador por Buenos Aires.

Al hacer un sorteo en la Legislatura ó junta de escrutinio, el que sacaba los números leía uno distinto del que en realidad era. Yo quiero que la mayor responsabilidad, como se establece por el artículo sancionado por la Cámara de Diputados, la tenga un presidente de una cámara judicial, que estoy seguro no cometerá una incorrección.

Sr. Olachea y Alcorta—La modificación hecha al artículo de la Cámara de Diputados es conveniente. La hipótesis de que necesitará demasiado tiempo el

presidente para leer, hace que se autorice entonces á hacer leer por otros; pero, en cuanto al fondo, la observación del señor Senador por la Capital, tiene razón de ser.

Sr. Presidente—Se va á leer el artículo.

—Se lee: El presidente leerá ó hará leer en alta voz las boletas que se extraerán...

Sr. Villanueva (B.)—Esa es la redacción de la Comisión.

—Sigue la lectura: ... una á una de la urna, y se pondrá de manifiesto á los otros miembros de la junta...

Sr. Villanueva (B.)—Esa es la redacción del proyecto del Poder Ejecutivo, aceptada por la Cámara de Diputados.

Sr. Ministro del Interior—Y la del Senado, sin más modificación que «hará leer», pero todas las demás precauciones y circunstancias se han mantenido como estaban, y parece imposible que se realice la superchería de leer un nombre por otro cuando es necesario entregar la boleta al candidato mismo ó á su apoderado.

Sr. Villanueva (B.)—En materia de precauciones y en asuntos electorales todo es poco, y por eso voy á votar por la sanción de la Cámara de Diputados.

Sr. Maciá—A mí me parece un poco excesivo que se puedan nombrar muchos empleados para que lean las boletas, porque ahí entra el mal; pero, me parece también excesivo que se obligue al Presidente á leer personalmente una cantidad de boletas que pueden llegar á miles de nombres.

Podría ese trabajo repartirse entre los tres miembros de la junta, puesto que los tres son responsables.

Sr. Villanueva (B.)—Acepto esa forma.

Sr. Maciá—Y el artículo entonces podría decir: «que leerá ó hará leer por otro miembro de la junta».

Sr. Olachea y Alcorta—Yo también acepto en esa forma, porque ella responde al propósito que se tiene en vista.

Sr. Villanueva (B.)—Entonces, en el artículo se diría: «que extraerá uno de los miembros de la junta y que leerá el Presidente ó hará leer por uno de los miembros de la junta las boletas que se

extraerán por estos mismos una á una de las urnas».

Sr. Presidente.—Quedará entonces redactado el artículo en los términos que indican los señores senadores. No haciéndose otra observación, queda aprobado el título.

—Se aprueba sin discusión el título VIII.

—En discusión el IX.

Sr. Ministro del Interior.—Aquí viene el artículo propuesto por el señor Senador por Buenos Aires, el que puede ir á continuación del artículo 73.

Sr. Maciá.—Más regular es que vaya como principio.

Sr. Ministro del Interior.—No tengo inconveniente.

Sr. Secretario Ocampo.—El artículo propuesto por el señor Senador por Buenos Aires dice así: «Durante las horas del comicio quedan prohibidos los espectáculos populares al aire libre ó en recinto cerrado, las fiestas teatrales ó deportivas y toda otra clase de reuniones públicas que no se refieran al acto electoral».

Sr. Olaechea y Alcorta.—Este podría ir como artículo 75, que es lo que habíamos convenido con su autor el señor Senador por Buenos Aires.

Sr. Ministro del Interior.—Mejor es que figure como artículo 73 y que se corra la numeración de los artículos 73 y 74.

Sr. Presidente.—Si los señores senadores lo aceptan, la proposición dictada por el señor Senador Láinez podría figurar como inciso 2.º del artículo 73.

Sr. Ministro del Interior.—No es posible, porque la disposición del artículo 76 es para que rija durante todo el día de la elección, y la que propone el señor Senador sólo se refiere á las horas del acto electoral.

Sr. Villanueva (B.).—Yo desearía que el señor Presidente de la Comisión me explicase qué significa este encabezamiento del artículo 77: «impiden el libre ejercicio del sufragio»; si el sufragio es compulsorio, está demás la palabra «libres».

Sr. Ministro del Interior.—Sí, señor: tiene razón el señor Senador.

Sr. Villanueva (B.).—Debe borrarse esa palabra.

Sr. Ministro del Interior.—Así es y quedará: «el ejercicio del sufragio».

Sr. Presidente.—Hace moción el señor Senador para que se borre esa palabra!

Sr. Villanueva (B.).—Sí, señor.

—Así se resuelve.

Sr. Ministro del Interior.—Aquí en el artículo 75 cabe la penalidad correspondiente al artículo propuesto por el señor Senador por Buenos Aires, y sería un inciso 5.º.

El artículo 75 dice lo siguiente: «Con quince días de arresto, los que hicieren uso de banderas, divisas ú otros distintivos durante el día de la elección y las noches anteriores y siguientes». «2.º Con tres meses de arresto los que cargasen armas». «3.º Con la misma pena para los que, con dictorios, amenazas, injurias ó cualquier otro género de demostraciones violentas, intentasen coartar la voluntad del sufragante». «4.º También con la misma pena los dueños de las casas en que se expenden bebidas, si burlasen la prohibición del artículo 71».

Sr. Olaechea y Alcorta.—Pero el señor Ministro ha leído el artículo de la Cámara de Diputados, no el del Senado, que es el 77 y que se refiere á la prohibición del artículo 73.

Sr. Ministro del Interior.—Tiene razón el señor Senador. Entonces ese inciso se puede redactar así: «También con la pena de tres meses de arresto á los infractores al artículo 73.»

Sr. Láinez.—Puede ponerse en el mismo inciso.

Sr. Ministro del Interior.—Hay que poner entonces «infractores del artículo 74», porque es el alterado.

Sr. Maciá.—Yo creo que no hay necesidad de un nuevo inciso; es mejor que entren todos en el mismo.

Sr. Presidente.—Queda aprobado en esa forma.

Sr. Villanueva (B.).—Yo deseo que el señor Presidente de la Comisión me explique por qué en el inciso 2.º del artículo 83 se dice «con la multa de 10 á 500 pesos.» Yo entiendo que la base de toda legislación penal es la igualdad de la pena para un delito igual; no me explico por qué se establece esa escala de 10 á 500 pesos.

Sr. Olaechea y Alcorta.—Porque la igualdad se traduce en la proporcionalidad y si bien es cierto que la falta—no se trata de un delito sino de la omisión de un deber cívico—es la misma en to-

do elector que no concurre al comicio, la pena tiene que traducirse en la proporcionalidad en cada caso. No puede ser lo mismo para una persona acaudalada que para el que no lo es. Así, una pena de 10 pesos para un jornalero equivale á una de 500 para una persona de posición desahogada.

Sr. Villanueva (B.).—Entonces, cuando una persona acaudalada le da un golpe de puño á otra, debe sufrir mayor pena que si lo da un obrero.

Sr. Olaechea y Alcorta.—En ese caso no, porque ahora se trata de penas pecuniarias.

Sr. Ministro del Interior.—Todas las penas tienen sus gradaciones.

Sr. Villanueva (B.).—Sí, cuando hay gradación ó circunstancias atenuantes ó agravantes en los delitos; pero no cuando el delito es el mismo.

Sr. Virasoro.—En esta parte se me ocurre también hacer una observación. Me parece que es donde procede agregar algo que considero conveniente.

Uno de los argumentos que se han hecho contra este sistema de lista incompleta es que se pone hasta cierto punto á los electores á disposición de las autoridades policiales, sean provinciales ó nacionales. Recorriendo el proyecto, no he encontrado ninguna prohibición terminante y clara, ni la sanción correspondiente contra las autoridades policiales ó militares, de cualquier jerarquía que fueren, que, bajo el pretexto de que los ciudadanos tienen el deber de votar, quieran compelerlos á ir á los comicios, y me ha parecido que es preciso que pongamos una disposición que prevea este caso y que establezca la sanción correspondiente.

Yo me permito proponer entonces, al final del inciso 2.º del artículo 83, el siguiente inciso: «Las autoridades policiales ó militares, de cualquier categoría que sean, no tendrán ingerencia alguna en la iniciación de estos juicios, ni podrán, con el pretexto de hacer efectivo el voto obligatorio, compeler á los ciudadanos á concurrir á los comicios, so pena de multas de cien á quinientos pesos, que serán impuestos con sujeción á lo dispuesto en la última parte del inciso anterior.» Esa parte dice lo siguiente, refiriéndose á las penas á imponerse á los que no concurren á votar:

«La penalidad será impuesta por el juez federal del distrito en juicio público, por acusación fiscal ó de cualquier ciudadano, y la multa se hará efectiva por la vía de apremio, á pedido del consejo de educación del distrito, del fiscal, de cualquier ciudadano, ó de oficio. Todas las actuaciones se harán en papel simple.»

Lo que yo quiero es que se aplique este mismo procedimiento para las penas en que incurran las autoridades policiales ó militares que pretendan compeler á los ciudadanos á concurrir á los comicios; y deseo también que ellas no tengan iniciativa alguna para iniciar el juicio, porque esto puede ser en sus manos un arma peligrosa, dados los antecedentes de nuestras costumbres políticas.

Yo pediría á la Comisión, si lo cree conveniente, que apoyara esta proposición.

Sr. Olaechea y Alcorta.—Pido la palabra.

La proposición del señor Senador por Corrientes tiende á evitar que la ley pueda ser un arma en manos de las autoridades de campaña para perseguir á los electores que les fueren desafectos, y, por otra parte, limitar la acción de esas mismas autoridades en la iniciación de los juicios por falta de cumplimiento de esta ley. Creo, señor Presidente, que la proposición del señor Senador por Corrientes está perfectamente encaadrada dentro del espíritu de la ley, y, por mi parte, no tengo inconveniente en aceptarla.

Sr. Presidente.—¿El señor Ministro acepta la indicación?

Sr. Ministro del Interior.—Sí, señor Presidente.

Sr. Presidente.—Se va á votar el artículo propuesto por el señor Senador...

Sr. Maciá.—Pido la palabra.

Yo deseo observar el artículo 84. Primeramente, donde dice «en dicha pena», debe estar la redacción en plural, y en cuanto á la distancia de 20 kilómetros será muy cómodo y bueno en la capital federal, en la proximidad de los grandes centros de poblaciones y de las capitales de provincias, pero no así tratándose de regiones poco pobladas; y tenemos que convenir que, para el pobre poblador de la campaña, cuya con-

dición ha cambiado tanto de unos años á esta parte tener que concurrir á pie al comicio, caminando cuatro leguas, es un exceso, por consiguiente, quiero pedir que esta distancia sea la fijada, como en el proyecto del Poder Ejecutivo y en el despacho de la Comisión de la Cámara de Diputados, que es de diez kilómetros.

—El señor Senador Olachea pronuncia breves palabras en voz baja.

Sr. Presidente—¿El señor Senador acepta la indicación?

Sr. Olachea y Alcorta—Por mi parte hago presente que la Comisión hizo esa modificación por pedido del señor Senador por La Rioja, pero yo personalmente no tengo inconveniente en aceptar que queden diez.

Sr. Ministro del Interior—El proyecto del Poder Ejecutivo proponía diez kilómetros.

Sr. Presidente—¿De modo que el señor Ministro acepta la indicación?

Sr. Ministro del Interior—Sí, señor.

Sr. Villanueva (B.)—Yo deseo saber por qué no se hace obligatoria la acusación por parte del fiscal público.

Sr. Ministro del interior—Se puede poner.

Sr. Villanueva (B.)—El artículo dice: «La penalidad será impuesta por el juez federal del distrito en juicio público por acusación fiscal ó de cualquier ciudadano, y la multa será efectiva por la vía de apremio á pedido del consejo de educación...» Yo desearía una redacción en el sentido de que fuera obligatoria la acusación. Sería el mejor modo de hacer posible una ley de amnistía el día en que el Gobierno se encuentre con 30.000 enjuiciados.

Sr. Maciá—Si es esa la intención, no debemos votarlo los partidarios de la ley.

Sr. Villanueva (B.)—Pero esto conviene al Poder Ejecutivo y á los señores senadores que están en favor del voto compulsorio; es una garantía más para asegurar mayor cantidad de votantes: yo los ayudo, aunque estoy en contra.

Sr. Maciá—La solución práctica de esta cuestión es que acusen los amigos políticos que han perdido votos por los ausentes.

Sr. Villanueva (B.)—¿Está bueno eso!

Sr. Maciá—Que allos se encarguen de acusar á los ausentes.

Sr. Villanueva (B.)—La ley debe ser bien redactada en el sentido de que produzca el mejor resultado posible. Yo propongo que se haga obligatorio para el fiscal público acusar á los que no voten.

Sr. Ministro del Interior—En el interés de todos está que sea un agente más eficaz de la acusación.

Sr. Presidente—¿Cuál sería la forma que propone el señor Senador?

Sr. Villanueva (B.)—La forma que propongo es la siguiente: «El fiscal público, en su respectiva sección electoral, tendrá obligación de acusar ante el juez federal, dentro de los quince días después de la elección, á todos los ciudadanos que hayan faltado al deber de asistir al comicio. Porque la causa justificativa la deducirán ante el juez.

Sr. Virasoro—¿Y cómo se establece la obligación de que conozcan todos?

Sr. Láinez—Por la publicación.

Sr. Villanueva (B.)—Cada mesa tiene á su cargo una serie de doscientos inscriptos y el día de la elección recibe doscientos sobres para los votantes. El Presidente de la mesa, terminado el acto electoral, á las cuatro, cinco ó seis de la tarde...

Sr. Maciá—A las seis, bastante tarde.

Sr. Villanueva (B.)—... hace un paquete con los sobres llenos y otro con los vacíos, correspondiendo estos últimos á los ciudadanos que no han votado. Además, tiene un pliego impreso del Registro Cívico, donde se anotan á medida que voten, los que cumplen con ese deber; y concluida la elección, sobres y registros se envían á la Junta Central de Escrutinio, donde el fiscal puede saber así quiénes no han votado.

Sr. Virasoro—No sé si el señor Ministro será del mismo parecer.

Sr. Ministro del Interior—Acepto la proposición con el mayor gusto.

Sr. González—Pido la palabra.

Voy á apoyar la moción del señor Senador por la Capital, fundándome en un antecedente. En primer lugar, el Código de Procedimientos establece como una obligación terminante de los fiscales el iniciar las acusaciones que correspondan á la acción fiscal; pero, como el Código de Procedimientos ha formado una especie de local cerrado y los

fiscales no se atreven á salir de la misión directamente encomendada á sus respectivos ministros, esto viene de costumbres que no hay por qué explicarlo ahora.

Los fiscales no son punibles, y ya se ha presentado el caso de creer que á un fiscal la penalidad de la ley electoral no le alcanza.

Creo, entonces, que la penalidad de la ley no está comprendida en la obligación aquella del Código de Procedimientos en el artículo respectivo.

Pero es más pertinente la iniciativa del señor Senador por la Capital en vista de esos antecedentes y creo que una sanción especial dentro de la ley electoral salvará todas las dudas y escrúpulos de los fiscales al creerse comprendidos dentro de la obligación de acusar.

Ahora, la acción privada, indudablemente, es imposible ó difícilísima hacerla efectiva.

Sr. Ministro del Interior—Le pediría al señor Senador por la Capital que me hiciera el favor de cambiar la redacción de ese artículo en sus términos. No diciendo «quince días después de la elección», sino diciendo «dos ó tres después de terminado el escrutinio.»

Se necesita que esté hecho el escrutinio para disponer de las actas como elemento de prueba.

Sr. Villanueva (B.)—Voy á proponer otra modificación.

Sr. Presidente—Sírvase dictarla el señor Senador.

Sr. Villanueva (B.)—«El fiscal público, en su respectiva sección electoral, tendrá obligación de acusar ante el juez federal respectivo á todos los ciudadanos que no hayan cumplido con el deber de votar en una elección. Estas acusaciones las deducirá dentro del plazo improrrogable de quince días después de haberse hecho el escrutinio de la elección con pérdida de su empleo si dejara de cumplir la disposición que precede.»

Esto podría figurar como inciso 3.º

Sr. Ministro del Interior—No conviene que figure como inciso y, entonces, mejor es que se sancione como artículo 84 y que el artículo 84 pase á ser 85.

Sr. Secretario Ocampo—El inciso 2.º dice que la penalidad será impuesta por el juez federal del distrito; por eso creía que esto venía bien como inciso 3.º

Sr. Ministro del Interior—Después de ese inciso 2.º viene la adición propuesta por el señor Senador por Corrientes, que ya ha sido votada por la Cámara.

Sr. Secretario Ocampo—Esa adición figura en el artículo 83.

Sr. Ministro del Interior—Como se trata de declarar esto como obligación de los fiscales, me parece mejor que figure en artículo por separado.

Sr. Presidente—Se va á leer nuevamente el artículo.

—Así se hace.

Sr. Villanueva (B.)—En donde dice «en una elección» debe ponerse «en cada elección».

Este artículo ha sido aceptado por el señor Ministro del Interior, y entiendo que por la Comisión.

Sr. Olachea y Alcorta—El señor Ministro del Interior y el vocal de la Comisión, doctor González, habrán aceptado, pero la Comisión no ha dicho nada.

Sr. Ministro del Interior—Yo no he aceptado.

Sr. Villanueva (B.)—Entonces no quiere el voto obligatorio.

Sr. Ministro del Interior—Sí, quiero; pero eso está comprendido en la estructura general del proyecto.

Sr. Olachea y Alcorta—En el inciso 2.º de uno de los artículos ya sancionados, se dice que la penalidad será impuesta por el juez federal del distrito, por acusación fiscal.

Sr. Villanueva (B.)—Entonces esta prescripción contiene ya la obligación de intervenir el agente fiscal.

Sr. Olachea y Alcorta—No comprendo á dónde quiere ir á parar el señor Senador.

Sr. Villanueva (B.)—Estamos conformes en la forma y vamos á estarlo también en el fondo.

Yo querría que esta ley se redactase como las leyes inglesas, con redundancia, pero con mucha claridad. No quiero que se me escape el fiscal por entre las mallas de la ley cuando tenga veinte mil juicios que iniciar.

Sr. Virasoro—Se podría votar.

Sr. Olachea y Alcorta—Primero debe votarse el despacho de la Comisión.

Sr. Presidente—El despacho de la Comisión está aprobado; esto es un

agregado y lo que se va á votar es si se incorpora este artículo.

—Se vota y resulta afirmativa de 11 votos.

Sr. Villanueva (B.)—Yo pido que quede constancia de mi oposición á esta diversidad de penas para un mismo delito. La explicación dada por el señor Senador por Santiago del Estero no me ha convencido.

Sr. Presidente—Se dejará constancia en el acta.

Sr. Villanueva (B.)—Basta con las palabras que he pronunciado.

Sr. Maciá—La modificación de subtituir, á 20 kilómetros, 10 kilómetros, quedó aprobada?

Sr. Presidente—Sí, señor Senador.

Sr. Villanueva (B.)—Yo siento estar molestando tanto la atención de la Cámara; pero me veo obligado á hablar otra vez.

Acabo de obtener que sea obligatoria para los fiscales la acusación de los que no voten; ahora voy á pedir exención de una de las penas establecidas por el artículo 82.

Este artículo, uno de los muchos que se han tomado de la Ley de España, que lo tenía ya la ley de 1902, y viene ahora en este proyecto, establece una penalidad de 6 meses á 1 año de arresto.

Sr. Olachea y Alcorta—¿Del despacho de la Comisión?

Sr. Villanueva (B.)—No me acuerdo precisamente del número del artículo; donde se habla de los miembros de la justicia federal, empleados, jueces de paz, etc. ¿Se comprende también á los gobernadores?

Sr. Olachea y Alcorta—Voy á explicar al señor Senador. Es el artículo 87.

Sr. Villanueva (B.)—Esta segunda parte del artículo 87, á que me voy á referir, tiene su historia.

Sr. Olachea y Alcorta—Voy á explicar al señor Senador...

Sr. Villanueva (B.)—Permítame.

Sr. Presidente—El señor Senador por la Capital está en el uso de la palabra. Luego contestará el señor Senador por Santiago del Estero.

Sr. Villanueva (B.)—Esta segunda parte del artículo 87 no existía en la ley de 1902, cuando ocurrió aquella elección de Monserrat, en la circunscripción 13.ª de esta capital en la cual eran candida-

tos los señores Lanusse y Cullen. Se atribuyó ingerencia en esa elección al gobernador de la Provincia de Buenos Aires, que era el doctor Ugarte, y que fué acusado ante el juez Veiga.

Para salvarlo de las consecuencias del juicio, se presentó un proyecto en la Cámara de Diputados que fué sancionado por el Congreso, estableciendo lo que dice esta segunda parte del artículo 87: que cuando fuera acusado, por haber tomado parte en una cuestión electoral, un funcionario nacional ó provincial que tuviera inmunidades, sería necesario previamente despojarlo de ellas ante sus jueces competentes.

Este es el origen de esta disposición. ¿No es así, señor Senador?

Sr. Olachea y Alcorta—Yo lo voy á referir.

Sr. Villanueva (B.)—Y si no hay ahora prevista en ninguno de los artículos de este proyecto de ley una penalidad para un funcionario de la categoría de un gobernador de provincia, yo no veo por qué subsistiría la segunda parte del artículo 87.

Sr. Virasoro—Están los jueces propios, la justicia federal.

Sr. Maciá—Está la disposición del artículo 82, que dice: «Los funcionarios públicos, nacionales ó provinciales, que tengan bajo su dependencia, como jefes de repartición ú oficinas, uno ó más empleados y los induzcan á adherirse á candidatos ó partidos determinados».

Sr. Presidente—¿Ha terminado el señor Senador por la Capital?

Sr. Villanueva (B.)—Sí, señor.

Sr. Olachea y Alcorta—Pido la palabra.

Quería explicar, señor Presidente, el origen de este agregado. Fué en el seno de la Comisión que surgió la duda y se vió la necesidad de hacerlo. Recuerdo que hice referencia á acusaciones que se formularon ante el Tribunal Federal de Santiago del Estero, que tenía el honor de desempeñar, el año 86, después de un proceso electoral muy agitado. Se presentó un ciudadano acusando á los miembros de la Junta Electoral ante el Juez Federal. Los miembros de la Junta Electoral, por la ley vigente entonces, eran el Juez Federal, el Presidente del Tribunal de Justicia y el Presidente de la Legislatura.

Entonces, señor Presidente, yo sostu-

ve y resolví como juez, que tratándose de funcionarios que estaban amparados por el privilegio del juicio político—el juez federal, por la Constitución Nacional, y el presidente del Tribunal de Justicia y el de la Legislatura por la Constitución de la Provincia,—no correspondía hacer efectiva la responsabilidad ante los tribunales ordinarios, si no ante los tribunales políticos instituidos por las constituciones nacional y provincial y que en todo caso para hacerse efectiva la penalidad era indispensable el desafiador.

Así lo resolví y ese fallo vino en apelación ante la Suprema Corte y fué confirmado.

Hice esta manifestación en el seno de la Comisión indicando que era un caso que correspondía consignar, y recuerdo que el señor Senador por La Rioja, doctor González, dijo «y también está previsto eso por el inciso 2.º artículo 113, de la Ley de Elecciones vigentes».

Ese es el origen del agregado, señor Presidente, y no tuvimos presente el caso á que se refiere el señor Senador.

Sr. Villanueva (B.)—Pido la palabra.

Yo no estoy conforme, señor Presidente, con la redacción del inciso 2.º que dice: «Los funcionarios públicos, nacionales ó provinciales, que tengan bajo su dependencia como jefes de repartición ú oficinas, uno ó más empleados y los induzcan á adherirse á candidatos ó partidos determinados».

Yo no encuentro que esto sea un delito, siempre que se los induzca por la persuasión, por la propaganda, por medios legítimos. Lo que es delito en los gobernadores ó jefes de repartición es hacer mal uso de su cargo, de su puesto, de los medios que están en sus manos, para viciar una elección ó para impedir el voto á sus conciudadanos.

Extraño mucho que el señor Senador por La Rioja, que conoce tan bien lo que sucede en otras naciones cuyas leyes ha estudiado, haya consentido en la redacción del artículo en esa forma. No es ese el criterio que hay sobre esto en los Estados Unidos ni hay una disposición análoga ó semejante en su Ley Electoral. Allí el Presidente de la República sale de la Casa Blanca y recorre los Estados proclamando su propia reelección en discursos dirigidos á los que son empleados y á los que no

lo son, induciéndolos á que voten por su candidatura con breves razones y no con amenazas ni imposiciones. Esto mismo se hace siempre en Inglaterra y lo hemos leído en las crónicas de la última elección, en la cual el jefe del Gabinete y los demás miembros del mismo, es decir, todo el Gobierno, recorrían los distritos de todo el país pronunciando discursos é induciendo á los ciudadanos á darle el voto en favor de su programa y por sus propias candidaturas. Igual cosa sucede en Francia cuando hay una elección: el Presidente del Consejo y los ministros van á los departamentos y circunscripciones que les corresponde á defender su propia elección. Hacen más, señor Presidente: cuando hay elecciones de consejos generales, que son en Francia la raíz y el manantial de su vida democrática, van todos á luchar en favor de su partido.

Yo no soy partidario de este artículo en la forma en que está redactado.

Al Gobernador que cumple con su deber se le debe dejar el camino libre para que haga y proponga lo que crea conveniente y legal. Es á otros gobernadores á los que se debe contener: á los que falsifican las elecciones, á los que no dejan aproximar á las urnas á sus ciudadanos...

Sr. Presidente—¿Qué es lo que propone el señor Senador?

Sr. Villanueva (B.)—... á esos oficialismos que hacen uso de las mallas artes posibles para simular y fraguar elecciones á su paladar; y, valiéndome del vocablo de la ley, inducen á votar por la fuerza, ó hablando de una manera clara y sintética, roban el voto de sus conciudadanos. Estos son los oficialismos que se deben perseguir y enfrenar, porque son, señor Presidente, los que han provocado en el país este abandono del voto, esta deserción de los comicios que se quiere ahora curar con el voto obligatorio. Los partidos políticos y los ciudadanos han perdido hasta la esperanza de triunfar en una elección, porque se han convencido que es inútil luchar contra los malos gobiernos de muchas provincias.

Es una escuela de corrupción para la juventud. La juventud que se educa en nuestras universidades y que va á sus provincias, lo primero que hace es ple-

garse al oficialismo; porque fuera del gobierno no tiene horizontes; porque no puede llegar jamás á ocupar una banca en la legislatura local ni obtener un puesto público si no recurre á este medio.

Esto es, señor Presidente, lo que ha provocado la frase del mensaje del Poder Ejecutivo: «Crear el sufragio y el sufragante». Es triste recordarlo: que en 1912 se haya visto obligado un Presidente de la República, después de cien años de vida independiente y sesenta de vida institucional, á presentar un proyecto de ley, diciéndole al Congreso: ¡Vengo á crear el sufragio y el sufragante!

Sr. Láinez—Y es la verdad. ¡Triste verdad!

Sr. Villanueva (B.)—Y es más sensible aún si se considera que con esta ley el Presidente no va á conseguir lo que desea. Por lo pronto no ha obtenido ningún efecto favorable con sus exhortaciones á algunos gobernadores que han venido en los últimos meses á la Capital, ni aun con los más inmediatos. Me refiero al gobernador de la Provincia de Buenos Aires.

El Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, como todos los demás, han permitido al Presidente de la República secundar y ayudar su propósito de regeneración política y electoral, se ha reformado la ley en la Legislatura de Buenos Aires; y, sin embargo, no hace mucho tiempo renunciaron doce diputados, se decretó en seguida una convocatoria para reemplazarlos y se efectuó la elección. ¿Y cómo se hizo esa elección? ¿Por los mismos métodos de siempre, volcando los padrones...

Sr. Láinez—¡Peores que nunca!

Sr. Villanueva (B.)—... y lo que es más escandaloso es que, donde vive el Presidente de la República, en el partido de Vicente López, hubo 760 votantes!!

Si el señor Presidente de la República hubiera tenido ese día la inspiración de hacer lo que hacía el Presidente Roosevelt, que no dejaba jamás de ir á votar á su distrito de Oyster-Bay, aun cuando se tratara de una elección municipal, hubiera presenciado un espectáculo bien curioso y sugerente. Veinte ó treinta vecinos desocupados tomando mate y cinco ó seis escribientes, volcando padrón como se dice en el caló electoral, hasta

obtener la suma de 760 votantes, que ni siquiera se acercaron ese día al comicio.

Esas son las elecciones de la Provincia de Buenos Aires.

Sr. Virasoro—¿Qué se conseguiría si los gobernadores...

Sr. Villanueva (B.)—Deseo suprimir la injusticia de que á un gobernador, que es honesto y cumple con su deber, se le prohíba dar su opinión ó hacer propaganda en favor de un candidato de sus simpatías.

Es á otros á quienes debe imponerse penas...

Sr. Olachea y Alcorta—Pido la palabra.

Sr. Villanueva (B.)—Voy á continuar.

Sr. Olachea y Alcorta—Perfectamente.

Sr. Villanueva (B.)—Siento molestar aún la atención de la Cámara, pero tengo que agregar algunas consideraciones más.

Es para estas elecciones, para las que no se necesita dinero; porque, con cincuenta ó cien pesos que entregue cada candidato, basta para enviar los emisarios ó agentes que vayan y vuelvan á los partidos ó departamentos donde debe simularse la elección, trayendo á la Capital el *balurdo electoral* ó sea las actas del comicio.

He hablado de la venalidad. Y bien, señor Presidente, este es el más insignificante, el menos perjudicial de los defectos de una elección; y siento que no esté presente el señor Senador Maciá, en este momento, porque me voy á referir al discurso que pronunció en la última sesión sobre esto, y que yo no pude contestar ese día, porque, desgraciadamente, estaba en antecámara.

Este es un error muy común en hombres políticos bien intencionados como el señor Senador Maciá, pero que no han tenido ocasión de actuar en elecciones reñidas, como son las de la Capital. El señor Senador Maciá decía en la sesión del sábado que lo más corruptor de una elección era la venalidad, y agregaba, señor Presidente, en una forma un tanto dramática: que el voto que se vende era como la mujer que se vende. Y bien, yo digo que presentar como argumento que el principal y peor vicio de una elección consiste en dar cinco ó

diez pesos á un pobre diablo que vende su boleta de voto, es como el trabuco de los Guerris.

El vicio más grande de una elección es suprimir, es simular la elección misma, impedirle ó torcer el voto de los electores abusando del poder que tiene en sus manos un gobernante.

En una ocasión memorable, en 1906, después de realizadas en la Capital las elecciones que dieron el triunfo á la Coalición, contestó esta objeción sobre la venalidad el eminente estadista doctor Pellegrini, en un elocuente discurso, del cual voy á leer algunos párrafos. Era en la sesión en que se discutía su diploma. El primero que observó el despacho de la Comisión fué el diputado socialista doctor Palacios, que dijo, más ó menos, lo siguiente: «No ignoro, señor Presidente, que la venalidad dentro de nuestras prácticas electorales corrompidas significa libertad, y que da la conciencia del valor del voto que desgraciadamente nada vale en otras partes de la República». El doctor Pellegrini nada replicó al doctor Palacios; pero, cuando otro Diputado, que había sido elegido por un oficialismo provincial, incurrió en el error de insistir en el mismo cargo, el doctor Pellegrini pidió la palabra y en un arranque genial de sinceridad y de franqueza, contestó en esta forma:

«Me va á permitir la Cámara que ocupe su atención durante muy breves minutos para levantar el cargo, ó lo que se ha creído que es un cargo contra la elección de la Capital y el diploma que he presentado como Diputado electo de ese distrito. Se asegura, señor Presidente, que en las elecciones de la Capital ha habido muchos votos comprados. Es cierto, felizmente es cierto; no hay voto más libre que el voto que se vende! La venalidad del voto es hija legítima de la libertad electoral y del sufragio universal. Donde hay un pueblo libre, en que cada ciudadano tiene un voto, allí la venalidad tiene un campo fecundo en donde ejercer su acción, porque en esa inmensa masa de analfabetos ó inconscientes que están armados de ese derecho, hay muchos que no saben ejercerlo sino en provecho propio, sacándole en el día de la elección algo con que atender á sus necesidades materiales».

Y en seguida se ocupaba de la venalidad en los Estados Unidos y en Ingla-

terra y de los esfuerzos y medios que intentaron sus estadistas para suprimirla ó disminuirla.

Prometió presentar reformas para frenar ese abuso cuando hubiera libertad electoral en el país y terminó aceptando el cargo sin avergonzarse, porque tenía la conciencia de haber salido de una urna libre en que nadie había sido obligado para la emisión de su voto.

Después de este discurso del doctor Pellegrini, fueron aprobados, sin réplica alguna su diploma y el de sus compañeros de lista, doctores Roque Sáenz Peña, Emilio Mitre, Luis María Drago, Santiago O'Farrell, Antonio Piñero, Ernesto Tornquist, Juan Ballestra y Rómulo Naón, que estaban allí presentes en la sesión.

Supongo que el señor Maciá no se molestará mayormente si me permito preferir á la suya esta opinión del doctor Pellegrini y de sus compañeros de lista.

He dicho, señor Presidente, que la venalidad es un grave defecto, y que primero hay que corregir la simulación ó la supresión de la elección, y que esta es la más grave tarea que tiene el gobierno á su cargo. Después de conseguir que en todas partes hayan elecciones de verdad, vendrá el momento de tratar de suprimir la venalidad.

En Inglaterra se pusieron de acuerdo dos grandes estadistas. Gladstone y Disraeli, para suprimir la venalidad, y lo único que se les ocurrió como más práctico y eficaz es lo que ya se proyecta en esta ley, el voto secreto, no el voto reservado, que es el que hemos tenido hasta ahora, el voto secreto que se coloca en un sobre en una pieza en que está solo el elector.

Esto, sin embargo, no va á corregir el mal en absoluto, como no lo ha corregido en ninguna parte del mundo, ni aun en Inglaterra, que es donde se realizan las elecciones más libres.

Sr. Virasoro—Pero se ha limitado.

Sr. Villanueva (B.)—Se ha limitado por una ley que establece que ningún elector pueda gastar más de 250 libras y, sin embargo, algunos han gastado en la última elección hasta 5 y 10.000 libras.

Sr. Virasoro—Y ha habido casos en que se ha castigado.

Sr. Villanueva (B.)—Ha habido ca-

esos como uno citado por el mismo doctor Pellegrini en el discurso á que acabo de referirme: un candidato que rechazado en el Parlamento porque además de gastar sus 250 libras se comprobó que había permitido á un elector vecino suyo entrar á cazar conejos en su parque.

Sr. Virasoro—Pero la ley lo prohíbe.

Sr. Villanueva (B.)—Se prohíbe, pero se gasta y en Estados Unidos más que en ninguna parte; y el señor Senador estará conforme conmigo en que la venalidad es un cargo insignificante si se compara con la falta de un gobierno que falsifica registros.

Sr. Virasoro—Cuando es colectivo es un defecto que debe destruirse.

Sr. Villanueva (B.)—Voy á terminar.

El señor Senador Maciá ha sido poco gentil y amable al comparar el voto que se vende con la mujer que se vende. La mujer, aunque sea una mujer caída, es al fin una mujer, y no es justo ni humano compararla con un perillán de parroquia que vende su voto por 5 pesos. Debía haber buscado su símil en otra parte, en esos que el señor Ministro del Interior ha calificado de monederos falsos del comicio, en esta Cámara, y que en la otra los ha llamado lodazales fétidos y pantanos inmundos: los gobernadores electores.

Allí se debe buscar el mal y esa es la enfermedad que hay que atacar. En ese sentido irá bien encaminado el Gobierno y, le prestaré todo mi modesto apoyo, aunque poco vale, para que pueda obtener lo más pronto que sea posible la efectividad y la verdad de la libertad del sufragio en toda la República.

Entretanto, yo pido á la Comisión que quiera aceptar la modificación del artículo en el sentido que he indicado, es decir, penar á los funcionarios que hagan mal uso de su poder para influir en la elección.

Sr. Ministro del interior—¿Que induzcan por coacción?

Sr. Olacchia y Alcorta—Desearía que la República Argentina figurase muy pronto ante el mundo civilizado dando el mismo espectáculo en materia electoral que nos ofrecen Inglaterra, Francia y Estados Unidos, cuando vemos que sus hombres dirigentes recorren los distritos y hacen propaganda, pronunciando discursos y sosteniendo su programa polí-

tico y económico ante las masas. Esto sería para mí un motivo de íntima satisfacción; porque, el día que así suceda y que miremos como un hecho la libertad electoral en toda su amplitud, entonces podremos decir con verdad: hemos llegado muy alto, hemos progresado á grandes pasos, hemos conseguido adquirir el alto nivel intelectual y moral á que aspiramos; pero en el estado de nuestras costumbres políticas, no podemos olvidar los hechos ocurridos en las épocas que nos han precedido en la vida como nación.

Somos, como decía el otro día, una democracia incipiente y embrionaria, que vamos haciendo á paso lento el aprendizaje de las instituciones. Nuestros anales demuestran que á nuestro pueblo le ha movido el supremo interés de la libertad, pero estos anhelos no se desarrollan sino á costa de grandes sacrificios y de tiempo. La sangre generosa que se vierte en las luchas por las instituciones de los pueblos nunca es perdida y los argentinos, que somos un pueblo de ayer, estamos en el camino de llegar á la consolidación de las grandes conquistas modernas y á la realización de nuestros destinos.

Si bien es cierto que el anhelo constante de pueblos é individuos es la conquista del bien supremo de la libertad, no lo es menos que no se consigue aquél sino mediante las cruentas luchas que cuestan sangre generosa.

No obstante ser común la fórmula, conviene repetirla: «El árbol frondoso de la Libertad, á cuya sombra deseamos cobijarnos todos, sólo se desarrolla y crece corpulento cuando es regado con sangre generosa.»

Esto explica la serie de contrastes y vicisitudes porque ha atravesado este país, como otros, para llegar á la consecución de aquel ideal.

No olvidemos que somos un pueblo nuevo, que estamos haciendo un difícil aprendizaje de nuestras instituciones, animados del mejor propósito de iniciar el verdadero camino de la libertad del sufragio. De manera que la disposición que el señor Senador por Buenos Aires desea no correspondería, porque no responde á nuestro estado actual. Nosotros no miráramos lo mismo que el señor Presidente de la República saliera en jira por todas las provincias é

hiciera la exposición de sus ideas y de su programa, como lo mirarían en Estados Unidos; la generalidad del pueblo aquí no lo interpretaría del mismo modo que allí; no produciría los mismos efectos; se juzgaría seguramente que era un acto de propaganda, que iba á ejercer una influencia que coartara la libertad; que su presencia, por su propia autoridad, vendría á evitar la manifestación libre de la opinión de las comunas y de los partidos. Por consiguiente, yo hago esta distinción, deseando que lleguemos hasta esa altura en nuestras costumbres políticas y doy la razón por qué la Comisión ha optado por este temperamento. Nada más.

Sr. Villanueva (B.)—Es mejor que un gobernador recorra su provincia pronunciando discursos y no que dé órdenes á los comisarios para que hagan la elección.

Sr. Ministro del Interior—Lo segundo es lo que se prohíbe por este artículo, no lo primero.

Sr. Olacchia y Alcorta—Opino lo mismo que el señor Senador.

Sr. González—Pido la palabra.

Voy á explicar muy brevemente mi aceptación de estos artículos.

Al empezar mi informe, dije que yo aceptaba en general el despacho de la Comisión, porque, por espíritu de conciliación, con el propósito de contribuir á la sanción de la ley, no había querido hacer el análisis jurídico, político y práctico de cada uno de los artículos en comparación con la ley vigente; por eso no contesto ni entro á examinar en particular observaciones de detalle, pero debo advertir que el inciso 2.º del artículo 82, no hay que engañarse al respecto, excluye á los gobernadores porque dice con toda claridad «Los funcionarios públicos, nacionales ó provinciales, que tengan bajo su dependencia, como jefes de repartición ú oficinas, uno ó más empleados, etc.»

Sabemos muy bien que en el lenguaje administrativo argentino «una repartición ó una oficina» no es el jefe del gobierno.

Sr. Villanueva (B.)—Deben estar incluídos.

Sr. González—No están, por la misma razón que la reforma que se hizo á la ley 4461, motivada por el incidente

político á que el señor Senador se refiere, fué para excluir los gobernadores de las molestias que les traía su participación en las luchas electorales. Eliminada esa responsabilidad por la reforma, quedó entonces comprendido que la ley se refería á los funcionarios secundarios de la administración, que eran los instrumentos de la imposición del voto.

Ahora, en cuanto al agregado del artículo 87, tiene perfecta aplicación por otra consideración que no se ha hecho presente: es que los empleados provinciales ó nacionales que deben tomar parte en la formación de las mesas receptoras de votos, del escrutinio, en toda la escala del proceso electoral, pueden ser miembros de gobiernos de provincia con inmunidades. La ley enumera los jueces, de los tribunales de provincia como nacionales, que están sujetos al juicio político, y ésta es una inmunidad puesta que los exime del proceso ordinario; y hay además dos diputados y senadores de las legislaturas de provincia que, como las constituciones de provincia en muchos casos no establecen la incompatibilidad absoluta entre las funciones de ambos poderes, hay casos de legislaturas de provincia en las que toman asiento los miembros del Poder Judicial y hasta empleados nacionales y miembros del Congreso Nacional. Entonces, muchos de estos funcionarios secundarios que entran en el proceso electoral pueden ser diputados, pueden ser miembros del poder provincial ó estar en cualquier otra forma favorecidos por un privilegio en materia de jurisdicción penal. Entonces la inclusión no es necesaria.

Así es que me parece que puede muy bien el despacho de la Comisión ser aceptado sin correr el riesgo de los inconvenientes que el señor Senador por la Capital enuncia, porque si se les deja facultad para que puedan influir en la opinión de sus empleados, nosotros no lo entenderemos á la moda americana, lo entenderemos á la moda argentina, que ya se sabe cuál es; así que por la moral más vale dejarlo como está.

Sr. Villanueva (B.)—Pido la palabra.

Así como he pedido que se haga obligatoria la acusación por el fiscal á todos los que no cumplan con la obligación de votar, así pido también que se incluya

ya una pena para todos los funcionarios altos ó bajos, que tuerzan ó impidan el voto de sus conciudadanos. Por consiguiente, creo que este artículo se debe generalizar y poner: *todos los funcionarios públicos nacionales y provinciales...* y, en seguida, los jefes de repartición, etcétera.

Basta con redactarlo en otra forma, para que quede bien...

Sr. González—Ojalá fuese así.

Sr. Villanueva (B.)—...cambiando, como indicaba el señor Ministro, la palabra «induzcan», por *ejercen coacción*.

En esa forma propongo á la Comisión una nueva redacción.

Sr. Olaechea y Alcorta—Propone una pena mayor.

Sr. Villanueva (B.)—Sí, señor. Una pena mayor.

Sr. Olaechea y Alcorta—Aquí se propone de seis meses á un año.

Sr. Villanueva (B.)—Y prohibición de ejercer cargos públicos durante diez años, para que no vuelvan á reincidir.

Sr. Presidente—No sé si el señor miembro de la Comisión acepta.

Sr. Olaechea y Alcorta—Mantengo el despacho de la Comisión.

Sr. Villanueva (B.)—Entonces es el mismo caso que teníamos en la discusión del artículo 2.º.

Estamos conformes en el fondo y queremos aclarar la forma. Desde luego, estamos de acuerdo. Yo digo: *Todos los funcionarios públicos, nacionales ó provinciales, ó jefes de repartición ú oficina, que tengan bajo su dependencia uno ó más empleados...*

Sr. Maciá—Este artículo importaría, en caso de votarse, la supresión de la segunda parte del artículo 87.

Sr. Villanueva (B.)—Nó.

Sr. Maciá—Porque es la sustitución de los procedimientos constitucionales por la acción directa del juez federal, con los de los juicios ordinarios y del Código criminal.

Sr. Olaechea y Alcorta—No me doy cuenta de la observación del señor Senador por Entre Ríos.

Sr. Villanueva (B.)—Yo creo que no hay motivo para suprimir el inciso segundo: es una reglamentación de la forma en que se va á llevar el proceso. El juicio político entre nosotros no es como en otras naciones: aquí no tiene más al-

cance que el despojarlo de su investidura...

Sr. González—Es cierto.

Sr. Villanueva (B.)—Entonces, despojado de su investidura, sería sometido por el juez para aplicarle la pena del otro artículo. Pueden quedar las dos disposiciones.

Sr. Carbó—¿Quiere el señor Senador que queden comprendidos todos los gobernadores de provincia?

Sr. Villanueva (B.)—Absolutamente. Los buenos, yo los defiendo.

Sr. Carbó—Es someterlos á una disminución impropia.

Sr. Olaechea y Alcorta—El señor Senador por la Capital mantiene su oposición al inciso segundo del artículo 87?

Sr. Villanueva (B.)—Es concordante con lo que propongo.

Sr. Olaechea y Alcorta—Sostengo ese inciso que no excluye la disposición que propone.

Sr. Villanueva (B.)—Entonces, la Comisión acepta.

Sr. Presidente—Habiendo sido aceptada la disposición propuesta por el señor Senador por la Capital, por el señor miembro informante de la Comisión, sin oposición de la Cámara, queda aprobada.

Sr. Carbó—Que se vote.

Sr. Villanueva (B.)—El señor Senador por Entre Ríos desea que se vote.

Sr. Carbó—El agregado del señor Senador importa someter á juicio, por una infracción á la Ley Electoral, á los gobernadores de provincia.

Sr. Villanueva (B.)—Cuando faltan á su deber.

Sr. Carbó—No es un juez federal. Es arrancarlos de sus jueces constitucionales para someterlos á un juicio impropio de sus funciones.

Sr. González—Después del desafuero.

Sr. Carbó—En ningún caso puede ser sometido á juicio por esta clase de leyes.

Sr. Villanueva (B.)—Hay que dar el ejemplo desde arriba.

Sr. Maciá—El primer ejemplo es sujetarlo á la Constitución que rige.

Sr. Carbó—Ya tendrán los malos sus jueces; pero, someterlos por una disposición así, de una ley electoral, que es transitoria, me parece impropio. Puede haber gobernadores malos, como puede haber gobernadores buenos, y no

es este el medio de hacerlos buenos, de premiéndolos.

Sr. Láinez—¿Y qué medio habría?

Sr. Villanueva (B.)—Un gobernador que cumple con su deber, y ellos son los primeros que deben dar el ejemplo, si van á cumplir el programa del Presidente de la República, no debe temer este artículo; un gobernador malo es el que tiene que temer que lo despojen de su investidura y lo sometan á juicio como si fuera uno que no ha emitido su voto en una elección; de lo contrario, ampararíamos á los malos gobernadores, á los que hay precisamente que oponerles esta disposición para contenerlos.

Sr. Carbó—No se ampara á nadie; se ampara las instituciones; no pueden ser objeto de estos juicios, que son de menor cuantía, un gobernador de provincia, un Presidente, un Vicepresidente de la República, ni los ministros nacionales á quienes no puede someterseles á esta clase de juicios antes de averiguar si son ó no culpables; pues, de hacerlo, se les expone á que sean deprimidos en un juicio ante el juez federal ó ante el juez ordinario; lo que, en verdad, es perfectamente contrario á nuestras instituciones.

Si queremos que á los funcionarios se les respete, los debemos dignificar y no deprimir.

Sr. Villanueva (B.)—Con esta ley sucederá como con las anteriores. En la capital de la República habrá libertad electoral y pureza de sufragio, pero en muchas provincias seguiremos como hasta ahora.

Sr. Carbó—Está equivocado el señor Senador cuando cree que no hay buena política sino en la Capital, pues hay provincias en donde se hacen elecciones ejemplares, como no han tenido lugar en esta Capital.

Sr. Presidente—¿Ha terminado el señor Senador por la Capital?

Sr. Villanueva (B.)—Sí, señor, y sostengo el artículo de la Comisión.

Sr. Virasoro—Conviene que se aclare bien qué es lo que se va á votar.

Sr. Maciá—Debe votarse el despacho de la Comisión.

Sr. Villanueva (B.)—La Comisión ha aceptado la modificación.

Sr. Maciá—Pero hay senadores que pedimos que se vote previamente el despacho primitivo.

Sr. Presidente—El despacho es el que acepta la Comisión.

Sr. Maciá—La modificación propuesta ha sido aceptada por la Comisión, pero como su primitivo despacho era ya del Senado y hay senadores que no estamos conformes con la modificación, lo que debe votarse es el despacho primitivo.

Sr. Villanueva (B.)—Apelo á la Secretaría y al Reglamento, para que informe cómo es cierto que cuando la Comisión acepta una modificación á su despacho, lo que se vota es el despacho con la modificación.

Sr. Secretario Ocampo—El despacho presentado á la Cámara pertenece á la Cámara.

Sr. Maciá—Es ese despacho el que debe votarse.

Sr. Villanueva (B.)—Que se lea el Reglamento.

Sr. Láinez—Que se vote primero el despacho de la Comisión, porque el resultado será el mismo.

Sr. Maciá—Indudablemente el resultado será el mismo.

Sr. Villanueva (B.)—No vale la pena hacer cuestión de esto.

Sr. Presidente—Se va á votar el despacho de la Comisión tal como ha sido presentado.

Sr. Virasoro—¿Sin la modificación?

Sr. Presidente—Sí, señor; sino fuera aceptado, se votará el mismo despacho con la modificación propuesta por el señor Senador por la Capital.

—Se procede á la votación y dice el

Sr. Secretario Ocampo—Afirmativa de nueve votos.

Sr. Villanueva (B.)—Pido que se rectifique la votación.

Sr. Presidente—Se va á rectificar la votación.

—Así se hace y da el mismo resultado.

Sr. Láinez—Se salvaron los gobernadores.

Sr. Maciá—Nó, señor; lo que se ha salvado es la Constitución y el régimen que nos gobierna.

Sr. Láinez—Las que se salvaron son las malas elecciones.

Sr. Maciá—Hay gobernadores que pueden dar ejemplo de pureza electoral á muchos de los que aquí la pregonan.

Sr. Láinez—Me parece imposible.

Sr. Carbó—Porque no habrá presenciado elecciones en las provincias.

Sr. Láinez—Porque tengo la prueba de que en toda la República se han hecho malas elecciones.

Sr. Virasoro—¿Entonces quiere decir que estamos mal sentados todos aquí?

Sr. Láinez—Probablemente, y en muchas peores condiciones los que hemos fabricado las legislaturas para venir al Senado; somos los que estamos peor.

Sr. Carbó—Para poder decir eso es necesario...

Sr. Presidente—No hay nada en discusión, señores senadores.

Se va á continuar con la orden del día.

Sr. Ministro del Interior—Respecto de las disposiciones transitorias, voy á pedir la inclusión de una nueva. Por el mecanismo de la ley, el archivo de las matriculas de los electores, con las impresiones digitales, debe enviarse á cada junta inscriptora. Es tanto el número de matriculas, que va á ser muy difícil que en el término de la ley pueda una parte siquiera ser enviada á las capitales de provincia y se prevé ese caso á fin de que la identificación se haga en las oficinas del Estado Mayor.

A esto obedece esta disposición transitoria que propongo y que puede agregarse como último artículo, es decir, quedaría como artículo 105. Dice así: «Las investigaciones de las impresiones digi-

tales de los electores impugnados á que se refieren los artículos 54 y 63 de la ley, serán verificadas por las oficinas dactiloscópicas del Ministerio de la Guerra, á las que las juntas escrutadoras pasarán las hojas correspondientes á dichos electores para su información, hasta tanto puedan organizarse los servicios dactiloscópicos en la forma dispuesta por el citado artículo 54.»

Sr. Olaechea y Alcorta—Hay asentimiento general.

Sr. Presidente—Previamente se dará lectura del artículo.

—Se lee y aprueba el artículo propuesto.

Sr. Presidente—Queda sancionado el proyecto.

Sr. Villanueva (B.)—Hago moción para levantar la sesión.

—Apoyado.

Sr. Villanueva (B.)—Recuerdo que la sesión de mañana está destinada para discutir la ley de debentures.

Sr. Presidente—Estando apoyada la moción del señor Senador por la Capital, se va á votar si se levanta la sesión.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Presidente—Queda levantada la sesión.

—Eran las 6 y 15 p. m.

ARTURO PARODY,
Director de Taquígrafos.